

ALEJANDRO FLORES VIELMA.

ROBO EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO.

RUC N°2200362659-1

RIT N°9-2023.-

Santiago, veintidós de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el día diecisiete de marzo del presente año, en la sala del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, constituido por los magistrados Bernardo Ramos Pavlov, Presidente de Sala, Rocío Morales Hernández y Jessica Beltrand Montenegro, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral de la causa RUC 2200362659-1 seguida por el delito robo en bienes nacionales de uso público, en grado de consumado, en contra de **Alejandro Flores Vielma**, chileno, nacido en Santiago, el 26 de julio de 1987, 35 años de edad, soltero, cédula de identidad N°16.741.038-3, maestro de terminaciones, quien cursó hasta 8º Básico, domiciliado en calle Grumete Quinteros N°0241, Villa Los Héroes, comuna de Maipú.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto **Tufit Bufadel Godoy**, con domicilio y forma notificación ya registrada en el Tribunal.

Por la parte Querellante de Telefónica S.A. concurrió **Valeria Martínez Aravena**, con domicilio y forma notificación ya comunicada al Tribunal.

La defensa del acusado estuvo a cargo del Defensor Penal Público, **Hernán Patricio Godoy Cortés**, con domicilio y forma de notificación ya señalado en el Tribunal.

SEGUNDO: Forma de desarrollo del presente juicio. El presente juicio oral se realizó por la modalidad video conferencia, esto es, con testigos que depusieron todos conectados por video conferencia vía plataforma Zoom, para lo cual, se realizó previamente audiencia de coordinación para determinar la forma de desarrollo de la audiencia, logrando de esta forma participar, escuchar a los testigos y visualizar el

resto de la prueba mediante la plataforma Zoom, pudiendo en todo momento el acusado conferenciar privadamente con su abogado defensor.

TERCERO: Acusación fiscal: Que la acusación del Ministerio Público, tuvo por fundamento la siguiente relación de hechos, según da cuenta el auto de apertura: *"Que con fecha 15 de abril de 2022, alrededor de las 10:10 horas, el acusado ALEJANDRO FLORES VIELMA junto al coimputado; fueron sorprendidos por personal de la 52º Comisaría de Maipú, en calle Las Talaveras frente al número 47, comuna de Maipú, cortando y sustrayendo con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño cables de uso telefónico y de internet desde las postaciones existentes en el lugar evaluados en \$12.700.000, correspondiente a 140 metros de cable multipar denominado 200-24; 70 metros de fibra óptica de 16 pelos y 70 metros de fibra óptica de 32 pelos, de propiedad de la querellante Telefónica Chile S.A., cortando el suministro de teléfono e internet de 700 clientes de dicha empresa."*

A juicio de los persecutores tales hechos configuran el delito de robo en bienes nacionales de uso público, ilícito previsto y sancionado en el inciso tercero del artículo 443 del Código Penal, en grado de ejecución de consumado, correspondiéndole al acusado participación en calidad de autor ejecutor.

Indican que, no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y solicitan se imponga al acusado la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales que correspondan y al pago de las costas de la causa, por su participación a título de autor en el delito de robo en bienes nacionales de uso público.

CUARTO: Alegatos de los Persecutores. Que, en su alegato de **apertura**, el **Ministerio Público** indica que, tal cual lo dice la acusación, se acreditará una apropiación de objetos materiales, cables de la vía pública, los cortan y se afecta a setecientos clientes de la comuna de Maipú. Resume la prueba a rendir, indica que, será la prueba justa para provocar convicción, solicita se dicte sentencia condenatoria.

Que, en su alegato de **clausura**, expresa que, la propuesta del Ministerio Público era acreditar que el imputado había tenido participación en calidad de autor en un robo en bienes nacionales de uso público de cables telefónicos y de internet, se desarrolló con un coautor y que afectaron a más de 700 puntos de conexión o clientes, esto es, conexiones alteradas respecto al suministro de este servicio básico.

Resume la prueba rendida, expresa que, estamos frente a un ilícito consumado.

Respecto al reconocimiento, la testigo señala que le parece que es el acusado, pero el testigo dice que fue uno de los detenidos.

Con la prueba rendida se acredita la participación del acusado en calidad de autor, que trajo un perjuicio de más de setecientos puntos de conexión.

En la **réplica** indica que, el tipo penal es del artículo 443 y el inciso final es la exasperación, el Ministerio Público estima que, sí se da la exasperación, hubo afectación de puntos de conexión, además, cuando se cortan cables necesariamente se afecta, subyace la afectación, pero hay prueba que efectivamente ocurrió.

En cuanto al desarrollo del delito, la acción ejercida respecto del bien, al cortar los cables y estar en el suelo podría discutirse, en este caso son guardados pelados y faltaba que se los llevaran y esto es solo agotamiento.

Respecto a la participación, es detenido en flagrancia y en cuanto al reconocimiento, la testigo da certeza de lo efectivo del sistema, dice creo que es y si fuera inductivo lo habría reconocido, por lo que, no es inductivo.

Que, en su alegato de **apertura**, la parte **Querellante** indica que, se adhiere a lo señalado por el Ministerio Público en su apertura, indica que, se acreditará el hecho y la participación del imputado en los sucesos objeto de acusación, los que reitera y resume la prueba a rendir. Solicita sentencia condenatoria.

Que, en su alegato de **clausura**, expresa que, se adhiere a lo señalado por el Ministerio Público, resume la prueba rendida, reitera su petición de condena.

En la **réplica** indica que, reitera lo ya señalado respecto a la prueba rendida.

QUINTO: Alegatos de la defensa; Que, la defensa del acusado en su alegato de **apertura** indica que, solicita la absolución de su representado, en cuanto a la calificación jurídica se dejará para la clausura, expresa que, su representado no ha tenido participación en los hechos.

En su alegato de **clausura**, la defensa en cuanto a la calificación jurídica, indica que, con los antecedentes no se encuentra acreditado el tipo penal por el que se presentó acusación, 443 inciso final, se estaría en presencia de un robo en bienes nacionales de uso público, pero no del artículo 443 inciso final. Si bien es cierto, el informe de siniestro exhibido a Palominos y lo que señaló da cuenta de suspensión de setecientos puntos, era una estimación y es un proceso más largo determinar si existió en el domicilio afectación del servicio y esto debe considerarse por el sentenciador.

Se debe considerar, además, por antecedentes dados el día de hoy, si se puede determinar las personas que cortaron los cables, pues no se le vio arriba de la postación, sino en el suelo con cables cortados, por lo que no puede imputarse a esta persona que la afectación de los domicilios haya sido por conducta de este sujeto, por eso no estamos en la causal del artículo 443 inciso final.

Respecto al grado de desarrollo, es imperfecto, estamos en frustración del tipo penal, de la esfera de resguardo no habían salido los cables.

En cuanto a la participación, la va a controvertir, en la audiencia de hoy, solo uno lo reconoce, pero no señala el nombre de quien era el detenido, no sabía si era Alejandro o Felipe, también hay una controversia cuando se hace este reconocimiento por Zoom, hay cierta inducción, aparecen los nombres de magistrados, fiscal y defensor y el único distinto es interviniente sala 603.

Insiste que, faltan antecedentes suficientes para determinar la participación culpable, no hay corroboración por debilidad de prueba. Solicita la absolución.

En su **réplica**, manifiesta que, había cables tirados en el suelo, acá no se determina que las personas detenidas cortaron el cable.

SEXTO: Valoración de la prueba de cargo. Que, teniendo en consideración que el Ministerio Público y Querellante acusaron al imputado en calidad de autor de un delito de robo en bienes nacionales de uso público, corresponde referirse a los antecedentes probatorios aportados por los persecutores, para efectos de determinar si estos revisten la suficiencia necesaria para dar por acreditados los presupuestos de su acción.

Tal como se indicó en el veredicto, el tribunal estima que, con la prueba rendida es posible tener por acreditado el ilícito de robo en bienes nacionales de uso público, situación que, además, afectó el suministro de un servicio domiciliario. En efecto, tal ilícito, se tiene por establecido, con la prueba testifical rendida por los acusadores, la que parece a estos sentenciadores, en este punto, absolutamente verosímil y coherente en cuanto al lugar de la sustracción de las especies, la forma de hacerse de las mismas, los elementos robados, el acopio de estos y por último el lugar en donde fue encontrado el imputado junto a los objetos de apropiación.

Una de las mayores críticas de la defensa, entre otras, es que no se puede acreditar la participación de su representado, puesto que, no existe prueba directa tales como testigos que lo hayan observado cortando los cables desde la postación.

Por esto, resulta esencial la **prueba indiciaria**, con ella es posible acreditar estos “acontecimientos que no son reseñados directamente por los testigos”, pero es posible determinar por la concurrencia de otros antecedentes probatorios.

Nuestra Jurisprudencia y Doctrina estiman válida la prueba indiciaria como forma de acreditar los ilícitos penales, pero esta debe cumplir ciertos requisitos, no se trata de una simple sospecha o una impresión subjetiva, sino que, este tipo de prueba debe cumplir un conjunto de exigencias que

permitan tener por ciertos acontecimientos que no se han podido acreditar con prueba directa.

Resulta que, no se puede rechazar una condena por valerse en su fundamentación en prueba indiciaria, mientras la misma, sea debidamente razonada, debiendo cumplir el estándar de convicción previsto en el artículo 340 del Código Procesal Penal, lo que, según lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, solo se realizará cuando estas inferencias: *"...tengan su punto de origen en hechos plenamente probados; que los hechos constitutivos del delito o participación se deduzcan de los primeros, a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano y, si los hechos probados permiten diversas conclusiones o interpretaciones, que la sentencia explique las razones de su elección. El nexo entre el hecho base y el hecho consecuencia debe ser coherente, lógico y racional. Su falta de concordancia con las reglas del criterio humano, que pueden tener su origen tanto en la falta de lógica o de coherencia en la inferencia como por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la misma, harán que las presunciones sean inaptas para lograr la convicción necesaria para hacer desaparecer la presunción de inocencia del imputado y, en definitiva, establecer su culpabilidad"*.¹

Tal como se indicó, no resulta posible construir una sentencia condenatoria con meras sospechas, por el contrario, esta debe basarse en la convicción, que la suma de indicios lleva a concluir la ocurrencia de los hechos que configuran el tipo penal respectivo.

La jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo Español han establecido que, en ausencia de prueba directa, en algunos casos, es preciso recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, cuya validez para enervar la presunción de inocencia ha sido admitida reiteradamente por ambos tribunales. A través de esta clase de prueba, es posible declarar probado un hecho principal, a través, de un razonamiento construido sobre la base de otros hechos, los indicios, que deben reunir una serie de condiciones, concretamente que el razonamiento se apoye en elementos de

¹ Excma. Corte Suprema Rol N°740-2005.

hecho y que éstos sean varios; que estén acreditados; que se relacionen reforzándose entre sí y, desde el punto de vista formal, que el juicio de inferencia pueda considerarse razonable y que la sentencia lo exprese, lo que no supone la imposibilidad de otras versiones distintas de los hechos, de manera que el Tribunal haya debido inclinarse por la única certeza posible, pero sí exige que no se opte por una ocurrencia fáctica basada en una inferencia débil, inconsistente o excesivamente abierta.²

La validación de la prueba indiciaria desarrolla por la jurisprudencia española se sustenta en una serie de argumentaciones, que aparecen como lógicas a la luz de los principios de nuestro sistema penal.

En primer lugar, se nos afirma que no pueden confundirse los indicios con las sospechas, en efecto, la sospecha es una suposición o creencia que se forma una persona a partir de ciertas señales, en cambio, el indicio es una deducción de la existencia de algo o de la realización de una acción de la que no se tiene un conocimiento directo. Parecen cuestiones muy similares, pero su diferencia radica en el grado de subjetividad, las sospechas parecen más imbuidas de este aspecto emocional, por otro lado, los indicios obedecen a un raciocinio más objetivo, a un análisis de hechos y/o circunstancias que nos llevan a colegir otros sucesos desconocidos.

La prueba indiciaria, también llamada indirecta, circunstancial o conjetural, es aquella que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son constitutivos del delito objeto de acusación, pero de los que, a través de la lógica y de las reglas de la experiencia, pueden inferirse los hechos delictivos y la participación del acusado. «La especialidad de las presunciones como método probatorio reside en que, en el proceso penal, la acreditación de la conducta punible, es decir, de los presupuestos fácticos que configuran la conducta típica y de la participación en ellos del acusado, se produce no a través de la valoración de un medio de prueba directo, sino de la acreditación de otra afirmación de hecho de la

² SSTs 273/2010 y 940/2011.

que puede desprenderse, en un proceso de razonamiento lógico, tales presupuestos».³

En este caso constamos con una serie de antecedentes, aportados por los funcionarios policiales, que permiten determinar la participación culpable del acusado en estos hechos, tal como lo refieren los carabineros, el acusado fue sorprendido mientras manipulaba los cables de la empresa Telefónica, una parte de estos ya se encontraban dentro de una bolsa apilados y guardados, además, junto a los detenidos se encontró una mochila con una sierra y otros elementos que indubitadamente sirven para cortar y pelar los cables de cobre y fibra óptica, por lo demás, estos sujetos al ver la presencia policial tratan de huir del lugar.

No cabe duda de que, con estos antecedentes directos, acreditados con la declaración conteste de los funcionarios policiales, es posible determinar la existencia del ilícito y la participación culpable del acusado.

En efecto, respecto del procedimiento policial, los hallazgos descubiertos durante el mismo, y la detención del acusado, se contó con la declaración de los dos funcionarios de carabineros que participaron, esto es, la sargento primero **Marcela del Carmen Bravo Araya** y el cabo segundo **Braulio de Jesús Vallejos Meriño**, quienes, en forma conteste y pormenorizada relataron que observaron a dos sujetos manipulando cables telefónicos, al acercarse dichos individuos huyeron, logrando ser retenidos, encontrando cerca del lugar de su detención una mochila con diversas especies utilizadas para cortar cables y un saco con cables ya cortados y pelados.

En específico **Marcela del Carmen Bravo Araya**, sargento primero de carabineros, expresa que, el quince de abril del año pasado, se encontraba de primer patrullaje de población, en calle Talaveras con Jorge Guerra se percata, con su compañero, que había dos sujetos jóvenes sustrayendo cables en la vía pública, al verlos tratan de huir en una bicicleta, ven los cables en un saco rosado, y los detienen.

³ STC 124/2001, de 4 de junio.

Detienen a dos personas, estos, cuando los divisan, cortaban el cable con un instrumento y cuando los ven toman la bicicleta, tratan de irse, ven cable en el suelo. Ambos los detienen y los suben a la patrulla para recabar su identidad.

Con el paso del tiempo se olvida de las caras, pero el interviniente de polerón gris podría ser, no recuerda el nombre del detenido.

Luego de ser llevado a la unidad se constata las lesiones y se contactan con el fiscal para que indique el procedimiento a seguir, no recuerda más, en un procedimiento normal debería pasar a control de detención.

Se le exhibe set fotográfico, ante lo cual señala: **Nº1.-** es el sector de Talaveras donde hay un terminal de buses, se percatan de los sujetos desde el fondo, hay cables en el piso y otros pelados; **Nº2.-** es el bien público desde donde ya estaban cortado los cables; **Nº3.-** se ve desde Jorge Guerra a Talaveras y cable en el suelo; **Nº4.-** es el saco cerrado con cable pelado, y otro poco de colores, lo tenían cerca de ellos y cuando los ven siguen su camino, como si no hubiera pasado nada; **Nº5.-** es la bicicleta en que se movilizaban; **Nº6.-** es desde Talaveras porque había más cable en el suelo; **Nº7.-** se ven cables, no sabe si es el saco, no distingue bien; **Nº8.-** andaban con una mochila, qué cuando los ven la tiran a las moras, que era una sierra y un cuchillo, no recuerda si lo arrojan a las moras o estaba en las moras; **Nº9.-** es la mochila donde está el cuchillo y la sierra; **Nº10.-** se ve el cuchillo, sierra y destornillador que se usa para pelar y cortar el cable.

Al ser consultada por la defensa, reitera que ve a dos personas jóvenes cortando cable con un instrumento, estas personas estaban en el suelo.

Braulio de Jesús Vallejos Meriño, cabo segundo de carabineros, quien señala que, el quince de abril de dos mil veintidós, CENCO los envió a verificar un procedimiento de unos sujetos que estaban sustrayendo cable del tendido público, una vez en el lugar, en Las Talaveras con Jorge Guerra, se percataron que había dos sujetos, se encontraban en el lugar pelando cables echándolos a un saco color rosado. Una vez que logran llegar a los

sujetos, estos se intentan dar a la fuga en bicicleta y al revisar sus pertenencias tenían un saco con cable y una sierra metálica -solo la parte que corta- cree que andaban con un alicate y un cuchillo.

Estaban involucrados dos personas en los hechos, reconoce al acusado como uno de los sujetos que participó. Luego verifican los antecedentes y pasan a la unidad policial y se contactan con fiscalía para ver el procedimiento a seguir, el que no recuerda, si se pidió fotos del lugar y llegó la víctima al lugar y se le tomó declaración.

Manifiesta que, un detenido fue Alejandro y otro Felipe.

Se le exhibe set fotográfico, ante lo cual señala: **Nº1.-** hay cables al medio de la calle cortados, estaban tal cual y al costado la bicicleta y los sujetos cortando; **Nº2.-** se ve el poste donde estaban cortados los cables; **Nº3.-** eran los cables al medio de la calle Las Talaveras; **Nº4.-** ahí está el saco con cable cortado, estaban pelados sin la funda plástica, metiendo solo cobre; **Nº5.-** se ve los cables, la bicicleta y los sacos; **Nº6.-** es otro lado, también estaban cortados los cables, un poco más allá por Las Talaveras; **Nº7.-** no aprecia nada; **Nº8.-** es el bolso que andaban trayendo los sujetos con herramientas; **Nº9.-** la mochila que llevaban los sujetos y **Nº10.-** las especies que llevaban los sujetos.

Añade que, llegó un sujeto a declarar que trabajaba para la empresa de telefonía de los cables.

Al ser interrogado por la defensa expresa que, no recuerda a quien detiene, el interviniente de la sala 603 no sabe si es Alejandro o Felipe.

Los sujetos estaban juntos, pelando los cables, es decir, estaban en el suelo. No sabría decir el nombre de quien llevaba la mochila, la tenía en la espalda, dentro de la mochila estaban las especies, aclara que, mantenían algo en la mano y al verlos lo guardan en la mochila, cree que, el "interviniente" llevaba la mochila en la espalda, pero no está seguro.

Estas declaraciones parecieron a estos magistrados serias y verosímiles pues emanan de personas que se encontraron en situación de percibir por sus propios sentidos aquello sobre lo que declaran, expresándose asertiva, concordante y convincentemente respecto de lo por

ellos vivenciado, dando cuenta pormenorizada de la forma en que se gestó el procedimiento, indican que al realizar un patrullaje observan a dos sujetos manipulando cables telefónicos, al verlos tratan de huir en una bicicleta, en el lugar se encontró un saco o bolso lleno de cables y una mochila con una sierra y otros elementos aptos para cortar los cables, reconocieron en el set fotográfico exhibido estas especies, así como, el lugar de los hechos y las postaciones afectadas.

Sus dichos, igualmente, resultan útiles y necesarios para estos sentenciadores a la hora de poder establecer, que la acción desplegada por el acusado se enmarca en el tipo penal, objeto de acusación, ya que, corroboran que se trataba de una vía pública, desde la cual se cortaron y apilaron los cables que suministraban telefonía e internet a los usuarios del sector. Todo lo cual, lleva a concluir que se trataba de bienes que se encontraban en un bien nacional de uso público.

Dada las características de la especies y el suministro que se proporcionaba a través de dichos elementos resulta necesario verificar si se da la hipótesis del inciso tercero del artículo 443 del Código Penal y para ello se presentó a estrados al testigo **Claudio Patricio Palominos Fuentes**, empleado, quien señala que, él trabaja en la compañía Telefónica Chile S.A., hace doce años, como inspector de seguridad y una de las funciones que tiene, es ir a la unidad policial a reconocer el material y hacer avalúo.

El 15 de abril, fue temprano en la mañana, recibió un llamado de la unidad policial, le dicen que sorprendieron a una persona sustrayendo cable desde la postación en camino a Talavera de la comuna de Maipú. Se traslada al lugar, donde toma fotografías y da cuenta que el cable cortado es de ellos y se va a la unidad policial donde le toman declaración e indica que fue lo que se cortó o sustrajo.

Aclara que, se sustrajo fibra óptica y cable de cobre multipar de uso telefónico. En este evento y cada vez que hay corte de red telefónica hacia algún servicio público o privado, es decir, cuando cortan fibra óptica o cable multipar ya sea telefonía o internet u otro servicio de la red, como

streaming, se produce una desconexión masiva de clientes, en este caso afectó a setecientos clientes, domicilios, explica que, un domicilio puede ser un hospital o un colegio, son puntos de conexión.

Se le exhibe set fotográfico, individualizado como prueba documental N°2, ante lo cual indica: **N°1.-** corresponde al lugar del corte, se ven cables en el suelo y al lado hay un paradero de micro; **N°2.-** es una mufa de postación telefónica porque no lleva electricidad, explica que, la mufa es el aparato que parece panal, la mufa son parches que van en la red, cuando se produce corte hay que unir la línea y se usa la mufa donde se une uno por uno los cables y la fibra óptica, observa que, donde van los cables es como una cruz de metal para evitar que corten los cables, son canales para hacer difícil el corte de cable; **N°3.-** son los cables, dos cables, de capacidad de 200 clientes cada cable y calibre de alambre es de 24 y hay una fibra de 16 y otra de 32 filamentos, los cables son de cobre y fibra óptica; **N°4.-** eso es cable multipar de uso telefónico sin funda, enrollado dentro de una bolsa, el cable fue desfundado, la cobertura negra que lo protege fue removida, este cable es de cobre con recubrimiento plástico multicolor, indica que, la goma protectora la retiran con calor, la queman; **N°5.-** se ve bicicletas, unos sacos y el cable telefónico, la diferencia es que uno está con cubierta y el otro sin cubierta; **N°6.-** hay una reja, una calle, una postación telefónica y cable telefónico en el suelo; **N°7.-** se ve cable, una pandereta, árboles y abajo no logra reconocer lo que hay en el suelo, parecen bolsas o cartón; **N°8.-** son hojas de sierra dentro de un bolso, por lo general es la que requisan carabineros en este tipo de procedimientos, se utilizan para cortar los cables, por lo general son hojas para metal; **N°9.-** una mochila, al lado hay trozo de funda de cable multipar y una bolsa y **N°10.-** hay cuchillo, hojas de sierra y destornilladores cuya punta se adapta para tracción del cable, explica que, se utilizan destornillador o cilindro de metal para tomar el cable y tractarlo y no con las manos.

Manifiesta que, cuando se trata de fibra se demoran en reponer cuatro días y tratándose de cable de cobre una semana, dependiendo de la importancia.

Al ser consultado por la querellante, da cuenta de sus años de experiencia (12 años), expone que, toma unos cuatro procedimientos a la semana, señala que, sabe que el cable es de Telefónica, indica que, en un 80% de este cable es de Telefónica, están rotulados o tiene el nombre del fabricante que es un solo cliente, que es Telefónica.

Explica que, no es lo mismo un cable telefónico que uno eléctrico, precisa que, las empresas eléctricas han cambiado a aluminio, el cable eléctrico es concéntrico y el de telefonía es de filamento, porque un filamento es un cliente.

Reitera que, el reconocimiento es visual, se toman fotografías, se confecciona informe, se da cuenta al agente de estructura de red y se avalúa por el mínimo, de un 60%.

El informe es técnico, el que se realiza a abogados, da cuenta de clientes sin servicio, cuantos domicilios se quedaron sin servicio y el avalúo que es base.

Se le exhibe **prueba documental N°1**, ante lo cual indica, que es el informe que realizan cada vez que tienen un incidente en la red y tiene distinto uso, aparece la fecha 15-04-2022, a las 13.41 horas, en este caso lo hizo él; aparece la dirección camino Las Talaveras, un avalúo de \$12.700.000 y setecientos clientes sin servicio.

Al ser interrogado por la defensa, expresa que, recibió llamado como a las doce y algo, le dijeron que sorprendieron a una persona sustrayendo cables. Fueron setecientos puntos de conexión afectados. Explica que, no se va puerta a puerta para ver si hay interrupción del suministro, expone que, el cable de cobre y fibra óptica son distintos, con la fibra óptica se sabe los afectados, en caso de cable de cobre se puede obtener y él hace un estimativo a los mínimos. En este caso los setecientos afectados son lo mínimo, para precisar se debe hacer un trabajo en computador.

Añade que, el cable de cobre tiene dos fundas una individual y otra general, la funda interna se corta y la individual no se puede sacar, es un tallarín de colores y se remueve a través del calor, prenden un colchón o neumático o parrilla.

El Ministerio Público incorpora el **documento N°1**, con lectura resumida.

En este caso los funcionarios policiales aluden que la víctima concurrió a la unidad policial a prestar declaración, lo cierto es que, quien concurrió fue este testigo -Claudio Palominos- trabajador de la empresa afectada, quien reconoció como de propiedad de su empleador los cables arrancados, detalló porque tenía certeza de la identidad y pertenencia de dichas especies, explicando que algunos cables tenían marca y por lo demás el único cliente de ese fabricante es Telefónica. Señaló que, dichos cables estaban apostados y fueron cortados, además, detalló como sacaban el plástico que recubría los cables de cobre y por último ilustró al tribunal sobre la afectación del suministro de telefonía e internet, señalando que a lo menos se afectó a setecientos clientes, antecedente que concuerda plenamente con la **prueba documental N°1**, consistente en: informe de siniestro de fecha 15 de abril de 2022, emitido por la empresa Telefónica Chile S.A., donde consta el corte del suministro de teléfono e internet de 700 clientes, la que fue por este reconocida y debidamente incorporada por el Ministerio Público.

Este testimonio fue concordante, con los atestados de los funcionarios policiales, en cuanto a las especies sustraídas, el lugar donde se localizaban, y su naturaleza.

La defensa se vale de este testimonio para cuestionar si efectivamente se afectó en específico el suministro aludido, puesto que, se hizo un informe general y no se verificó caso a caso, pero resulta que, el mismo testigo explica que el corte de estos cables necesariamente afecta el servicio, indicando que se informa un número aproximado de clientes afectados, aludiendo a un número generalmente inferior al real, pero que, dicha sustracción implicó la reposición de los cables afectados lo que tomó a lo menos cuatro días para la fibra óptica y siete para los cables de cobre. Todo esto lleva a concluir que necesariamente se afectó el suministro de los servicios básicos que llevaban estos cables sustraídos por el acusado.

Los atestados de los testigos fueron refrendados por la evidencia fotográfica y documental, no controvertida.

Se estima que sus declaraciones, emanan de personas que, al no conocer al enjuiciado, parecen carecer de motivos de inquina o animadversión como para faltar a la verdad en sus asertos, por todo lo cual se les asignará a estas probanzas pleno valor de convicción, como prueba de cargo acreditativa del hecho punible y la intervención delictiva del acusado, dando todos plena razón de sus dichos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 309 del Código Procesal Penal.

SÉPTIMO: *Proposición fáctica acreditada:* Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, el Tribunal por unanimidad ha adquirido convicción, más allá de toda duda razonable y sin contradecir la lógica, las máximas de experiencia ni los conocimientos científicamente asentados que se encuentran probados los siguientes hechos:

"Que con fecha 15 de abril de 2022, alrededor de las 10:10 horas, ALEJANDRO FLORES VIELMA junto a otro sujeto; fueron sorprendidos por personal de la 52º Comisaría de Maipú, en calle Las Talaveras frente al número 47, comuna de Maipú, cortando y sustrayendo con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño cables de uso telefónico y de internet desde las postaciones existentes en el lugar valuados en \$12.700.000, correspondiente a 140 metros de cable multipar denominado 200-24; 70 metros de fibra óptica de 16 pelos y 70 metros de fibra óptica de 32 pelos, de propiedad de la querellante Telefónica Chile S.A., cortando el suministro de teléfono e internet de al menos setecientos clientes de dicha empresa".

Que a fin de dar por establecido este hecho se tuvo en consideración la prueba testimonial, fotográfica y documental, incorporadas mediante exhibición, las cuales han sido estimada por estos sentenciadores como suficientes e idóneas para formarse plena convicción de la efectividad del hecho descrito precedentemente, dada la gravedad, precisión y concordancia de los datos obtenidos de estos, máxime si no fueron desvirtuadas por antecedente alguno en contrario.

OCTAVO: Calificación jurídica del hecho acreditado: Que los hechos consignados precedentemente, importan para el tribunal la calificación jurídica de los mismos, dentro de la figura del delito de robo con fuerza en las cosas de especies que se encuentran en bienes nacionales de uso público, previsto y sancionado en el artículo 443 del Código Penal, en grado de consumado.

La figura del delito de robo con fuerza en las cosas en bienes nacionales de uso público fue introducida por la Ley N°11.625 de fecha 4 de octubre de 1954.

Ahora bien, para precisar en qué consiste el aludido lugar se debe, por extensión, recurrir al artículo 589 inciso primero del Código Civil el cual expresa que *"Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos"*.

En virtud de lo anterior, y como corolario de las disposiciones sustantivas civiles –en cuanto al ámbito de aplicación territorial de comisión de la conducta- y penales – en lo que se señalará-, la sustracción de la cosa mueble se comete sobre una extensión de terreno -bien público - carente de resguardos que impidan la entrada no autorizada y sin encontrarse limitada tratándose, por supuesto, de bienes nacionales de uso público, cuyo caso es el analizado por haberse sustraído cables que se encontraban en postes ubicados en la vía pública.

Por otro lado, y en cuanto al medio de comisión empleado, dicha normativa exige que se utilice cualquiera de las diversas clases de fuerza en las cosas que enuncia el artículo 443 del Código Penal, aplicándola directamente sobre la cosa objeto del robo o bien a los medios que la protegen.

La apropiación de cables que se encontraban en bienes nacionales de uso público, se constató al haberse establecido que tales especies se encontraban sobre los postes de la vía pública, según lo determinaron los dos policías comparecientes que sorprendieron al acusado precisamente

junto a estas especies e instrumentos aptos para el corte de los mismos desde el lugar donde se encontraban, además, el propio informe de la empresa afectada da cuenta de la ubicación del siniestro en la calle, incluso acompañando fotografías de la postación ubicada en tal lugar, en que se aprecian cables colgando y otros en el piso, determinando, además, la naturaleza de los cables sustraídos.

Debe establecerse que el hechor actuó movido por ánimo de lucro, pues ello deviene como lógica y necesaria consecuencia del hecho que hiciera suyas especies ajenas, más desde que ni siquiera se insinuó y menos probó que actuara motivado por un interés distinto.

En cuanto al grado de desarrollo, se estima que se encuentra en grado de consumado, por reunirse todos sus presupuestos, toda vez que las especies sustraídas fueron recuperadas, a poca distancia de la postación de origen, dentro de una bolsa, saliendo de la esfera de custodia y resguardo de su titular e ingresando a manos del sujeto activo del delito que constituyó de hecho una nueva esfera de custodia y resguardo sobre las especies. Desestimándose de esta forma la alegación de la defensa en este punto.

Cabe agregar que, en este caso, además, concurre la circunstancia de determinación de pena que contempla el inciso final del artículo 443 del Código Penal, en efecto, con la prueba rendida en especial con la declaración de Palominos Fuentes y la prueba documental N°1, consistente en el informe de siniestro de fecha 15 de abril de 2022, emitido por la empresa Telefónica Chile S.A., se pudo acreditar que se interrumpió el servicio domiciliario de telefonía e internet a lo menos a setecientos clientes, cuestión que, justamente contempla la norma en análisis, por lo que, concurriendo esta interrupción del servicio domiciliario de telefonía e internet, corresponde aplicar la sanción penal contenida en este inciso.

NOVENO: Posible declaración del acusado: Que el imputado legalmente advertido de su derecho a guardar silencio, hizo uso de esta prerrogativa.

DÉCIMO: Participación del acusado: Que, la participación reproachable del acusado, en cuanto autor de este delito, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código del ramo, por haber intervenido en este de manera inmediata y directa, se encuentra legalmente acreditada con el mérito de las inculpaciones directas que realizaron los funcionarios aprehensores, respecto de que dos sujetos, fueron detenidos luego de observarlos manipulando cables de la empresa Telefónica, junto a cables ya dispuestos dentro de un bolso y una mochila con instrumentos aptos para el corte de dichos bienes.

El cabo segundo Vallejos Meriño, reconoció al imputado en la audiencia, la sargento primero Bravo Araya señaló que por el tiempo transcurrido no estaba segura, pero podría ser la persona que señala como interviniente, correspondiendo esta al imputado. Tenemos una imputación directa y otra que no estaba completamente segura, pero igualmente señala al imputado, antecedentes que junto a al hecho no cuestionado de la detención del encartado y su puesta a disposición de control de detención, permite tener por cierta la identidad del detenido es día -Flores Vielma- como el autor de los hechos acreditados.

La imputación de los funcionarios policiales, sumado al contexto temporo-espacial, de los hechos establecidos, permiten tener por cierta la participación del acusado en los sucesos objeto de acusación fiscal; quedando claramente determinada la calidad de autor del imputado.

UNDECIMO: Alegaciones de la defensa: La defensa cuestionó, el grado de desarrollo del ilícito, la concurrencia de la circunstancia de exasperación de pena del inciso final del artículo 443 del Código Penal y la participación del acusado.

Todas estas alegaciones fueron desestimadas por el tribunal en el análisis de la prueba y calificación jurídica de los hechos.

DUODÉCIMO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal: En la instancia de la audiencia contemplada en el artículo 343 del Código Procesal Penal, con el fin de acreditar que el imputado no goza de irreproachable conducta anterior, el persecutor introdujo extracto de filiación

y antecedentes de Flores Vielma donde consta las siguientes anotaciones: causa RIT 2806/2006 del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, condenado como autor de robo en bienes nacionales de uso público, consumado, el 07 de septiembre de 2007, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, pena remitida; causa RIT 2139/2006 del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, condenado como autor de amenazas condicionales a la pena de 41 un días de prisión en su grado máximo, pena remitida; causa RIT 59/2007 del 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, condenado como autor de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación en grado de frustrado y receptación consumada, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y 41 días de prisión en su grado máximo, multa de 1 UTM, libertad vigilada; causa RIT 434/2008 del 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, condenado como autor de robo con intimidación y receptación consumados, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y 41 días de prisión en su grado máximo, multa de 5 UTM, pena cumplida el 28-6-2010; causa RIT 134/2014 del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, condenado como autor de la falta de consumo de drogas del artículo 50 de la ley 20.000 a una multa de 5 UTM, pagada; causa RUC 1.500.895.777-8 del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, condenado como autor de hurto simple por un valor de media a 4 UTM, consumado, a 21 días de prisión en su grado medio y multa de 0,3 de UTM, cumplidas; y causa RIT 928/2016 del Juzgado de Garantía de Talca, condenado como autor de estafas y otras defraudaciones, consumado, a multa de 11 UTM y 61 días de presidio menor en su grado mínimo, sustituida por prestación de servicios a la comunidad.

Antecedentes suficientes que acreditan que el condenado no goza de irreprochable conducta anterior.

DÉCIMO TERCERO: *Determinación de la pena.* Determinado que el tipo penal acreditado es un delito de robo en bienes nacionales de uso público, en grado de consumado, en la que el acusado ha tenido participación en calidad de autor, lo que al tenor del artículo 443 del Código

Penal fija el marco penal aplicable en abstracto en presidio menor en sus grados medio a máximo. Concurriendo la hipótesis del inciso final de este artículo, que obliga a aplicar la pena en su grado máximo. Y atento lo dispuesto en el artículo 449 del Código Penal, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo en el mínimo, por no existir antecedentes para imponer un rango de pena mayor, tal como los persecutores lo solicitaron en la audiencia pertinente.

DÉCIMO CUARTO: Costas. Teniendo en consideración, respecto del sentenciado lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, atendida la facultad que el inciso final del artículo 47 del Código Procesal Penal confiere al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, se lo eximirá del pago de las costas de la causa, ya que ha sido representado por profesional de la Defensoría Penal Pública.

DÉCIMO QUINTO: Beneficios o penas sustitutivas. Atendida a la extensión de la sanción impuesta al acusado y los antecedentes pretéritos del condenado, la defensa indicó que corresponde cumplir la pena intramuros, cuestión que comparte el tribunal.

Se deja constancia que al sentenciado le favorecen tres días de abono, de acuerdo a la certificación realizada por la Jefe de la Unidad de Administración de Causas y Sala de este tribunal.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 15 N°1, 18, 21, 24, 29, 50, 442, 443, 449 y demás pertinentes del Código Penal; 4, 295, 297, 314, 325, 332 y siguientes y 336, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, se declara:

I.- Se condena a ALEJANDRO FLORES VIELMA, ya individualizado, a sufrir la pena de **TRES AÑOS Y UN DÍA, de presidio menor en su grado máximo,** a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como autor del delito consumado de robo en bienes nacionales de uso público, previsto y sancionado en el artículo 443 del

Código Penal, ilícito cometido en la comuna de Maipú, el quince de abril de dos mil veintidós.

II.- No reuniéndose los requisitos establecidos en la ley 18.216, no se concede al sentenciado ninguna de las penas sustitutivas contemplados en la misma, por lo que deberá cumplir real y efectivamente la pena corporal impuesta, la que se contabilizara desde que de inicio al cumplimiento de la presente condena, a cuyo computo deberán abonarse los tres (03) días que permaneció privado de libertad por esta causa, según consta en certificación emitida por la Jefa de Unidad de Administración de Causas del Tribunal, agregada a la carpeta electrónica.

III.- Que, según lo señalado en el fundamento décimo cuarto no se condena en costas al acusado.

IV.- Que habiéndose condenado al encartado por un delito al cual la ley asigna pena aflictiva, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 18.556 modificada por la Ley N° 20.568, oficiándose al efecto al Servicio Electoral, al tenor de dicho precepto, en su oportunidad, una vez ejecutoriado el presente fallo.

La Unidad de Causas del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, velará por el estricto cumplimiento del artículo 10 de la Ley N° 20.285, y actas pertinentes de la Excma. Corte Suprema, en lo relativo a la publicidad de la presente sentencia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Devuélvanse los antecedentes acompañados por los intervinientes.

Se deja constancia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 342 inciso final del Código Procesal Penal, que la presente sentencia fue redactada por la magistrada doña Jessica Beltrand Montenegro.

RUC N° 2200362659-1

RIT N° 9-2023.-

Dictada por la Sala del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por las magistradas don Bernardo Ramos Pavlov, en

calidad de Presidente de Sala; doña Rocío Morales Hernández y doña Jessica Beltrand Montenegro, todos titulares de este tribunal.